JUZGADO CUARENTA LABORAL DEL CIRCUITO

Bogotá D.C, dieciocho (18) de marzo de dos mil veintiuno (2021)

REFERENCIA: Acción de tutela promovida por Yeimy Yuliel Bermúdez Cuellar contra La Superintendencia de Industria y Comercio. Radicado 2021-00009-00.

Agotado el trámite del asunto, y no observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede el despacho a dictar sentencia dentro de la acción de tutela de la referencia.

ANTECEDENTES

DERECHOS INVOCADOS: Solicita la actora que se le ampare su derecho fundamental al debido proceso y los demás que resulten conexos al mismo.

PERSONA O ENTIDAD CONTRA LA QUE SE DIRIGE LA ACCIÓN: Superintendencia de Industria y Comercio representada por Andrés Bernardo Barreto González o quien haga sus veces, vinculándose a su grupo de cobro coactivo.

HECHOS RELEVANTES: Como fundamento del amparo constitucional, en síntesis, se relacionaron los siguientes:

1. Manifiesta la actora que el 7 de abril de 2016 la delegatura para asuntos jurisdiccionales de la superintendencia de Industria y Comercio, dentro del trámite de protección al consumidor con número de radicado 14-76886 adelantado en su contra, expide orden de reembolso en favor de la señora Alcira Lara Aguilar por monto de 5'500.000, que dicha suma fue reembolsada a través del abogado Paul Alexander Sierra Tamara, expidiéndose el respectivo Paz y Salvo el día 18 de enero de 2018, para que obre dentro del proceso Verbal Sumario de Protección al Consumidor y el proceso ejecutivo con radicado 110014003002201701084 adelantado en el Juzgado Segundo Civil municipal de Bogotá D.C.
2. Aduce la accionante que la Superintendencia de Industria y Comercio realizó las siguientes actuaciones que vulneran el debido proceso:
 - Expedición del auto 22502 del 1 de marzo de 2018, mediante el cual se impone multa a la accionante por valor de setenta y seis millones ciento quince mil doscientos noventa y dos pesos Mcte (\$76'115.292) (pag 23 a 25, archivo pdf n°010 del expediente digital)
 - Auto que libra mandamiento de pago en contra de la actora mediante Resolución n° 39282 del 5 de junio de 2018 (pag. 12 y 13 del archivo pdf 015 del expediente digital).
 - Expedición de la resolución n° 2480 del 5 de junio de 2019, que resuelve el escrito presentado por la accionante el cual denomina "derecho de petición" y al que la accionada le imprime el trámite de excepción en contra del mandamiento de pago. (pag. 2 a 5 del archivo pdf 032, contenido en la carpeta 013 del expediente digital).
 - Emisión del auto 123194 del 2 de diciembre de 2019, mediante el cual la coordinadora del grupo de trabajo coactivo fija por concepto de liquidación del crédito el monto de Noventa Millones Novecientos Once Mil Ochocientos Cuarenta y Seis pesos Mcte (\$90'911.846) (Pag. 19 a 21 del archivo pdf 014 del expediente digital)

- Decreto de medidas cautelares mediante el auto 112176 del 12 de noviembre de 2020, por medio del cual se ordenó el embargo de los vehículos de placas FYO726, DKS210 y DTP336, propiedad de la actora. (pag. 2 y 3 del archivo pdf 043, contenido en la carpeta 013 del expediente digital)

TRÁMITE PROCESAL

La acción de tutela fue admitida mediante auto del 4 de marzo de 2021 (archivo pdf 006 del expediente digital). La admisión fue notificada a la Superintendencia de Industria y Comercio, y al Grupo de Cobro Coactivo de la misma en debida forma tal y como consta en archivos pdf 007 y 008 del expediente digital. Igualmente, mediante providencia de la fecha se requirió a la Delegatura de asuntos jurisdiccionales de la SIC, para que aportara copia del trámite jurisdiccional adelantado en contra de la señora Bermúdez Cuellar con número de radicado 14-76886, tal decisión fue comunicada a la citada entidad, tal y como consta en archivo pdf 016 del expediente digital.

CONTESTACIÓN:

La accionada Superintendencia de Industria y Comercio por intermedio del Coordinador del Grupo de Gestión Judicial rindió informe el pasado 9 de marzo de 2021 (archivo pdf 010 del expediente digital), en los siguientes términos:

- Que mediante Auto No. 45608 del 27 de octubre de 2014, se admitió la demanda de Acción de Protección al Consumidor interpuesta por LIDA ALCIRA LARA AGUILAR en contra de YEIMY YULIEL BERMUDEZ CUELLAR con radicado 14-76886, la cual fue debidamente notificada a la demandada (página 15 del archivo pdf 010 del expediente digital), que mediante Sentencia proferida en Audiencia el 1º de abril de 2016, cuyo extracto reposa en el Acta No. 1312 del mismo año (página 11 y 12 del archivo pdf 010 del expediente digital), se ordenó a YEIMY YULIEL BERMUDEZ CUELLAR que dentro del término de los diez (10) días hábiles siguientes a la ejecutoria del fallo, procediera a reembolsarle a LIDA ALCIRA LARA AGUILAR la suma de cinco millones quinientos mil pesos (\$5'500.000) que pago por el servicio objeto de litigio.

-Que al no haberse acreditado el cumplimiento de lo ordenado en la Sentencia proferida en Audiencia el 1º de abril de 2016, se impuso a título de sanción, una multa a la accionante YEIMY YULIEL BERMUDEZ CUELLAR, por valor **de SETENTA Y SEIS MILLONES CIENTO QUINCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$76.115.292,00)**, por el incumplimiento de lo ordenado en la referida sentencia, mediante Auto No. 22502 del 1º de marzo de 2018 (página 23 a 25 del archivo pdf 010 del expediente digital).

-Que una Entidad de carácter interdisciplinario cuya competencia se extiende al desarrollo de Funciones Administrativas y jurisdiccionales en materia de protección al consumidor, competencia desleal, entre otros.

Finalmente, solicita desvincular a la Superintendencia de Industria y Comercio del presente asunto, al considerar que la entidad no ha vulnerado los derechos fundamentales invocados, teniendo en cuenta que las actuaciones del ordenamiento jurídico aplicable, garantizando a cada uno de las partes vinculadas al proceso la protección de sus derechos.

La Delegatura de asuntos jurisdiccionales de la SIC, NO aportó la copia del expediente 14-76886, solicitada por este Juzgado en la fecha.

CONSIDERACIONES

La acción de tutela se estableció como un mecanismo para garantizar la protección efectiva de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de Colombia y, la misma fue reglamentada en el Decreto 2591 de 1991, que señaló las reglas básicas de su aplicación. Es así como el artículo 6º de dicha normativa delimitó su procedencia para situaciones en las cuales no existieran recursos o mecanismos judiciales ordinarios salvo que fuera interpuesta como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, lo cual no obsta para que se analice en cada caso si el procedimiento correspondiente resulta eficaz de acuerdo con las circunstancias fácticas y jurídicas.

PROBLEMA JURÍDICO corresponde al despacho resolver los siguientes:

¿Vulnera la Superintendencia de Industria y Comercio con su actuar en el trámite de cobro coactivo con número de radicado 18-103026, el derecho al debido proceso de la actora? ¿Es la acción de tutela el mecanismo procedente para dejar sin efecto el trámite de cobro coactivo adelantado en contra de la actora y las medidas cautelares allí decretadas? ¿Existe vulneración al debido proceso por la omisión en que incurre la Superintendencia de industria y comercio en pronunciarse sobre la solicitud de amparo de pobreza presentada por la actora y continuar con el trámite cobro coactivo? ¿Existe una morosidad excesiva e injustificada de la accionada en pronunciarse sobre la solicitud de nulidad presentada por la actora desde el 23 de enero de 2019?

DEBIDO PROCESO

El derecho al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Carta, se erige como *“una serie de garantías con las cuales se busca sujetar a reglas mínimas sustantivas y procedimentales, el desarrollo de las actuaciones adelantadas por las autoridades en el ámbito judicial o administrativo, con el fin de proteger los derechos e intereses de las personas vinculadas”*.

La jurisprudencia constitucional ha definido el derecho al debido proceso como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia (C-341/14).

EL DEBIDO PROCESO EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO.

En el plano de las actuaciones y procedimientos administrativos, la Corte Constitucional ha considerado que el debido proceso tiene como caracteres básicos los siguientes¹: se trata de un derecho de rango constitucional; involucra las características propias del debido proceso general; existe y es operativo no sólo para impugnar una decisión de la Administración, sino que se extiende durante toda la actuación administrativa que se surte para expedirla, y posteriormente en el momento de su comunicación e impugnación; responde por la integridad de las garantías procesales y por la efectividad de los principios que informan el ejercicio

¹ Sentencia T-103 de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, consideración jurídica No. 3.4

de la función pública (igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad); tiene entre sus componentes fundamentales los principios de publicidad y celeridad de la función administrativa; y determina que las actuaciones administrativas se rijan por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en la concurrencia de procedimientos administrativos especiales.

DE LAS FUNCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

La Superintendencia de Industria y Comercio es una entidad de carácter interdisciplinario, conoce entre otros asuntos los siguientes: (I) Protección de Datos Personales, (II) Protección al Consumidor, (III) Promoción a la Competencia, (IV) Vigilancia a Cámaras de Comercio, (V) Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal, (VI) La administración del registro de Propiedad Industrial, estas en el desarrollo de Funciones Administrativas. (VII) Por otra parte, en desarrollo de sus funciones Jurisdiccionales está facultada para adelantar procesos en materia de protección al consumidor y competencia desleal, Propiedad Industrial, entre otras.

FACULTAD DE COBRO COACTIVO DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

El legislador por disposición expresa del art. 5° de la Ley 1066 de 2006, facultó a ciertos entes públicos para que por ellos y ante ellos se adelanten los procesos de recaudo de las obligaciones pecuniarias que imponen a los administrados, siguiendo para tal efecto el procedimiento contemplado en el Título VIII del Estatuto Tributario Nacional. Igualmente en virtud de lo dispuesto en el artículo 100 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, las reglas aplicables en los procesos que adelanta la Superintendencia de Industria y Comercio corresponde a las dispuestas en el título IV del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (arts.98 al 101) y el Estatuto Tributario Nacional.

FUNCIÓN JURISDICCIONAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

Establece el inciso tercero del artículo 116 de nuestra Constitución Política estable en su literalidad que, *“Excepcionalmente la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas. Sin embargo, no les será permitido adelantar la instrucción de sumarios ni juzgar delitos.”* Como consecuencia de lo anterior, el Congreso de la República expidió la Ley 446 de 1998, en la cual se le otorgó a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO facultades jurisdiccionales en materia de protección al consumidor, especialmente en el artículo 145, el cual establece: *“Atribuciones en materia de protección al consumidor. La Superintendencia de Industria y Comercio ejercerá, a prevención, las siguientes atribuciones en materia de protección del consumidor, sin perjuicio de otras facultades que por disposición legal le correspondan...”*. Igualmente, la Ley 1480 de 2011 y la Ley 1564 de 2012, ratificó tales facultades en cabeza de esta Superintendencia, cuando en el artículo 24 estableció lo siguiente: *“Ejercicio de funciones jurisdiccionales por autoridades administrativas. Las autoridades administrativas a que se refiere este artículo ejercerán funciones jurisdiccionales conforme a las siguientes reglas: 1. La Superintendencia de Industria y Comercio en los procesos que versen sobre: a) Violación a los derechos de los consumidores establecidos en el Estatuto del*

Consumidor. b) *Violación a las normas relativas a la competencia desleal...*"
(negrilla propia)

Expuesto lo anterior, queda claro que, en materia de protección al consumidor, la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO está revestida de funciones JURISDICCIONALES para dirimir las controversias que se presenten entre productores y/o distribuidores de bienes o servicios y sus consumidores, por expreso mandato legal y constitucional.

ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA – MORA INJUSTIFICADA

En Sentencia T -052 de 2018 la Corte Constitucional señaló que la mora judicial es un fenómeno multicausal, muchas veces estructural, que impide el disfrute efectivo del derecho de acceso a la administración de justicia, y que se presenta como resultado de acumulaciones procesales estructurales que superan la capacidad humana de los funcionarios a cuyo cargo se encuentra la solución de los procesos.

Los artículos 229 de la Constitución Política de 1991 y 2º de la Ley 270 de 1996, consagran el derecho fundamental de toda persona a acceder a la administración de justicia, cuyo contenido ha sido desarrollado por la jurisprudencia constitucional en diferentes ocasiones. En la Sentencia T-283 de 2013, la Corte Constitucional definió este derecho como *"la posibilidad reconocida a todas las personas residentes en Colombia de poder acudir en condiciones de igualdad ante los jueces y tribunales de justicia, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida protección o el restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en las leyes"*.

Dentro del deber de garantizar el goce efectivo del derecho, se encuentra incluida la solución célere de los asuntos adelantados ante funcionarios judiciales, por ello, esta Corte ha determinado la prohibición de *dilaciones injustificadas* en la administración de justicia y la procedencia de la acción de tutela frente a la protección del adecuado acceso a la administración de justicia en casos donde exista mora judicial.

Al respecto, en Sentencia T-230 de 2013, reiterada en la T-186 de 2017, entre otras, se expusieron las circunstancias en las cuales se configura la mora judicial injustificada: *"(i) se presenta un incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación judicial; (ii) no existe un motivo razonable que justifique dicha demora, como lo es la congestión judicial o el volumen de trabajo; y (iii) la tardanza es imputable a la omisión en el cumplimiento de las funciones por parte de una autoridad judicial"*.

CARÁCTER RESIDUAL Y SUBSIDIARIO DE LA ACCIÓN DE TUTELA

En abundante jurisprudencia, la Corte Constitucional ha puesto de presente el carácter residual y subsidiario de la acción de tutela, razón por la cual en principio ésta no es el mecanismo pertinente para controvertir actuaciones judiciales y/o administrativas.

"Como ha sido reiterado en múltiples ocasiones por esta Corporación, la acción de tutela es un mecanismo de origen constitucional de carácter residual y subsidiario, encaminado a la protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas que están siendo amenazados o conculcados. Ello en consonancia con

el artículo 86 de la Constitución, los artículo 6º numeral 1, del Decreto 2591 de 1991 que establecen como causal de improcedencia de la tutela: “[c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos mecanismos será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante.”. El carácter subsidiario y residual de la acción de tutela ha servido a la Corte Constitucional para explicar el ámbito restringido de procedencia de las peticiones elevadas con fundamento en el artículo 86 de la Carta Política, más aún cuando el sistema judicial permite a las partes valerse de diversas acciones ordinarias que pueden ser ejercidas ante las autoridades que integran la organización jurisdiccional, encaminadas todas a la defensa de sus derechos”. Sentencia T-747/18.

CASO CONCRETO:

Sostiene la accionante que la Superintendencia de Industria y Comercio, ha incurrido en violación al Debido Proceso, con la actuación seguida en su contra con el número de radicado 18-103026, disponiendo el embargo de sus bienes, lo anterior pese a haber aportado paz y salvo, en relación al acatamiento de la orden de devolución dada por la SIC a favor de la señora Lidia Alcila Lara.

Este Despacho Judicial encuentra que frente al proceso administrativo de cobro coactivo adelantado por la Superintendencia de Industria y Comercio con número de radicado 18-103026, se han surtido las siguientes actuaciones relevantes:

- Se libró mandamiento de pago en contra de Yeimy Yuliel Bermúdez el 5 de junio de 2018.
- Se surtió notificación personal del aducido mandamiento de pago el día 16 de enero de 2019, radicación Coactiva 18-103026 Expediente administrativo 14-76886, tal y como consta en el archivo pdf nomenclatura 030 contenido en la carpeta 013 del expediente digital.
- El día 23 de enero de 2019, la señora Bermúdez Cuellar, actuando en nombre propio presenta memorial solicitando se le ampare por no contar con los recursos para designar un abogado, se declare la nulidad de todo lo actuado a partir del auto # 22502 del 1 de marzo de 2018 por indebida notificación y proponiendo la excepción de pago de la obligación (archivo pdf nomenclatura 031 contenido en la carpeta 013 del expediente digital)
- Mediante Resolución N° 2480 del 05 de febrero de 2019 “por la cual se resuelve una excepción”, la accionada Superintendencia a través de la Coordinadora del grupo de trabajo de cobro coactivo resolvió parcialmente la solicitud presentada por la actora, precisando que el pago aducido corresponde a la orden de reintegro de dineros dada por la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales dentro del proceso verbal sumario – acción de protección al consumidor, obligación distinta de la multa que se cobra en el asunto que se debate, como consecuencia de lo anterior, declara no probada la excepción de pago propuesta, dispone correr traslado a la delegatura de asuntos jurisdiccionales de la solicitud de nulidad y guarda absoluto silencio frente al amparo de pobreza. (archivo pdf nomenclatura 032 contenido en la carpeta 013 del expediente digital)
- Por auto No. 112176 de 12 de noviembre de 2020 se decretaron medidas cautelares, ordenando el embargo de automotores propiedad de la demanda (página 2 y 3 del archivo pdf nomenclatura 43 contenido en la carpeta 013 del expediente digital).

- A través de auto 123194 del 2 de diciembre de 2019, la coordinadora del grupo de trabajo coactivo fija por concepto de liquidación del crédito el monto de Noventa Millones Novecientos Once Mil Ochocientos Cuarenta y Seis pesos Mcte (\$90'911.846) (Pag. 19 a 21 del archivo pdf 014 del expediente digital).

Conforme las pruebas aportadas al plenario se observan lo siguiente:

Si bien es cierto en principio no se cumpliría con el requisito de subsidiariedad, en la medida que las decisiones de fondo y/o definitivas que se adoptan dentro de los tramites de cobro coactivo tienen control ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo conforme el art. 101 del CPACA en concordancia con el Art. 835 del E.T., como el auto que decide las excepciones, el que sigue adelante la ejecución y el que decide sobre la liquidación del crédito, siendo además procedente la solicitud de medidas cautelares con posibilidad de suspensión del procedimiento administrativo de cobro coactivo, este despacho advierte una irregularidad procesal abiertamente vulneradora del debido proceso en su componente derecho a la defensa técnica, que no obstante no ser advertida por la actora en su alegato, el Juez constitucional no pueda pasarla por alto en la medida que la actora siempre ha actuado ante el tramite administrativo adelantado por la Superintendencia en causa propia careciendo de formación jurídica.

Al respecto, debemos recordar que una vez surtida la diligencia de notificación personal del mandamiento ejecutivo dictado el trámite de cobro coactivo 18-103023, la que ocurrió el 16 de enero de 2019, la actora actuando en causa propia procedió a presentar documento denominado "Derecho de Petición" el día 23 del mes de enero de 2019, a través del cual, como se señaló, se presentaron varias solicitudes que necesariamente debían ser objeto pronunciamiento de fondo por la SIC, siendo una de ellas la siguiente:

- *"EL proceso se llevó a cabo con base en lo dispuesto en la Ley 1066 de 2006 y del Estatuto Tributario, sin que se me haya dado la oportunidad de ejercer mi derecho a la defensa, sino hasta este momento; **lo que realizo en nombre propio porque no tengo recursos actualmente, para acceder a los servicios profesionales de un Profesional en Derecho, por lo que de ser necesario solicito de me ampare en este sentido**". (transcrito hecho 1. Negrilla y subrayado del despacho).*

De la anterior manifestación, resulta evidente para esta falladora que la señora Bermúdez Cuellar, estaba haciendo uso de la posibilidad que le otorga el art. 152 del C.G.P. de solicitar AMPARO DE PROBREZA, petición que motivó en no tener recursos para designar un abogado de confianza, refiriendo ser madre cabeza de familia y proveer económicamente por sus 3 hijos, tener a su progenitora en delicado estado de salud y ser víctima del conflicto armado por desplazamiento forzado, allegando algunos soportes documentales relacionados con tales situaciones de vulnerabilidad. (archivoPDF 031 carpeta 013).

Considera este despacho que esta figura es una materialización del derecho al debido proceso en su componente derecho de contradicción – defensa técnica, que como lo señalamos se debe garantizar no solo en actuaciones judiciales, sino también en las administrativas, y que en los términos del inciso 3 del art. 152 del C.G.P. de concederse, conllevaría a la SUSPENSIÓN DEL TERMINO, en el caso concreto para pronunciarse sobre el mandamiento de pago hasta que el abogado de oficio designado hubiese aceptado su cargo.

Sobre la figura del amparo de pobreza, en un trámite constitucional precisamente adelantado contra la Superintendencia de Industria y Comercio por la imposición de multas y su consecuencial cobro, en sentencia T -364 de 2020 se señaló:

“Ahora bien, a esta omisión de informar sobre la naturaleza judicial del procedimiento, se suma que la entidad accionada no estima procedente el amparo de pobreza dentro del trámite de verificación de cumplimiento, pues así se lo manifestó a la Defensoría del Pueblo,² en el que sostuvo que “no está prevista para eventos como este, donde se suscribió un acuerdo de transacción en materia de consumo que hizo tránsito a cosa juzgada”.

“Respecto a esta afirmación, debe recordarse que esta Corporación ha precisado que el amparo de pobreza es “una institución de carácter procesal desarrollada por el legislador para favorecer a las personas que por su condición socioeconómica no pueden sufragar los gastos derivados de un trámite judicial”,³ con la que se pretende superar barreras económicas para el acceso a la administración de justicia, y en consecuencia, asegurar el ejercicio igualitario de este derecho.⁴ Por tanto, no es admisible que la entidad accionada descarte el derecho de los ciudadanos a solicitar el amparo de pobreza dentro del trámite que adelanta en el ejercicio de funciones jurisdiccionales, pues con ello los pone en una difícil situación de desventaja para actuar dentro del mismo”.

En este orden de ideas, la omisión de la administración en pronunciarse sobre la solicitud de amparo de pobreza, y la correspondiente designación de un abogado de oficio vulnera abiertamente el debido proceso de la actora, quien ha manifestado su interés en ser asistida por un profesional del derecho afirmando carecer de recursos para realizar su designación, al punto que después de presentar la petición, el trámite de cobro coactivo continuó, se decidió sobre las excepciones, y se realizó la liquidación del crédito, entre otras actuaciones, siendo importante precisar que no se trata de un trámite administrativo de poca monta, pues la multa cobrada que para el 2 de diciembre de 2019 ya superaba los \$ 90.000.000.

Así las cosas, la administración persiste en la omisión en pronunciarse de fondo sobre la solicitud de amparo de pobreza y de ser procedente la consecuente designación de un abogado de oficio que garantice la defensa técnica de la ciudadana, pues desde que se presentó la solicitud en enero de 2019, reiterada por la actora con memorial radicado con No. 18-103026-00054-0002 donde se adjunta la citada petición del 23 de enero de 2019 y al que se hace alusión en el oficio dirigido a la actora del 29 de enero de 2021 por el grupo de cobro coactivo, visto a págs. 2 y 3 archivo 063 de la carpeta 013, ningún pronunciamiento de fondo se ha hecho, al punto que con ello se considera cubierto el requisito de inmediatez, por que la omisión de la Superintendencia de industria y comercio al día de hoy se mantiene vigente.

Dada la omisión presentada por el grupo de cobro coactivo de la SIC frente a la solicitud de amparo de pobreza y consecuente designación de defensor de oficio y los efectos legales que tendría su prosperidad (suspensión del término que tiene la demandada para contestar la demanda), encuentra esta Juzgadora argumento suficiente para amparar el derecho fundamental al debido proceso, y como

2 *Ibíd.*, numeral 1.7.

3 Corte Constitucional. Sentencia T- 339 de 2018. MP. Luis Guillermo Guerreo Pérez.

4 *Ibíd.*

consecuencia de lo anterior se ordenará dejar sin efecto los artículos primero, tercero y cuarto de la resolución 2480 del 05 de febrero de 2019, expedida por la Coordinadora del Grupo de Trabajo de Cobro Coactivo de la Superintendencia de Industria y Comercio consistente en declarar no probada la excepción propuesta, seguir adelante la ejecución y practicar la liquidación del crédito y gastos administrativos y como consecuencia de lo anterior el auto 123194 del 2 de diciembre de 2019 correspondiente a la liquidación del crédito por monto de noventa millones novecientos once mil ochocientos cuarenta y seis pesos (\$90'911.846) (Pag. 19 a 21 del archivo pdf 014 del expediente digital) y todas las actuaciones que de ella se deriven, manteniéndose incólume las decisiones relacionadas con medidas cautelares como quiera que en los términos del art. 837 del E.T. estas pueden ser decretadas incluso de manera previa, y en este caso el mandamiento de pago no se encuentra afectado por la irregularidad señalada.

En consecuencia, se dispondrá que en el termino perentorio de cinco (5) días la Coordinadora del grupo de trabajo de cobro coactivo de la SIC proceda a dejar sin efecto lo actuado a partir de la petición de amparo de pobreza del 23 de enero de 2019, en los términos referenciado, la que deberá ser resuelta conforme las reglas del Código General del Proceso.

Ahora, tampoco puede pasar por alto esta falladora que la anterior no es la única morosidad excesiva e injustificada en que ha incurrido la Superintendencia de Industria y comercio a través de sus grupos de cobro coactivo y actualmente a través de la delegatura de asuntos jurisdiccionales, pues como se señaló desde el 23 de enero de 2019 la actora solicitó la nulidad del auto 00022502 del 1 de marzo de 2018, por indebida notificación y solo por reiteración de la ciudadana, hasta el 22 de enero de 2021 se dio cumplimiento por el grupo de cobro coactivo a la remisión a la delegatura de asuntos jurisdiccionales, sin que se hubiese acreditado dentro de este trámite que algún pronunciamiento de fondo se hubiese realizado frente a dicha petición de nulidad.

Por lo anterior, y conforme la jurisprudencia citada se considera que la SIC a través de sus dependencias administrativa y jurisdiccional han incurrido en una excesiva mora sin motivo razonable que la justifique, por lo cual se ordenará a la delegatura para asuntos jurisdiccionales que en un término máximo de cinco días proceda a designar un abogado de oficio a la actora dentro del trámite sancionatorio jurisdiccional, (distinto al administrativo de cobro coactivo), orden esta que se motiva en la naturaleza jurídica sancionatoria que tiene la multa consagrada en el el # 11 del art. 58 de la Ley 1480 de 2011, la cual se determina en el estudio de constitucionalidad que para dicha norma se realiza Sentencia C-561 de 2015, y teniendo en cuenta que en el derecho disciplinario sancionatorio ante la petición del investigado de contar con defensa técnica resulta imperiosa la designación de un abogado de oficio en conforme se señala en el art. 17 del la Ley 734 de 2002.

Igualmente, se le ordenará a la SIC a través de su dependencia jurisdiccional que una vez la actora cuente con abogado de oficio, de trámite a la solicitud de nulidad por ella presentada en los estrictos términos señalados por el Código General del Proceso.

DECISIÓN

En mérito de anteriormente lo expuesto, la Juez Cuarenta Laboral del Circuito de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad constitucional,

RESUELVE:

PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental al DEBIDO PROCESO a la accionante Yeimy Yuliel Bermúdez Cuellar, de conformidad con las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio a través de del grupo de trabajo de cobro coactivo que en el término de cinco (5) días siguientes a la notificación de esta providencia **DEJE SIN EFECTO** lo actuado dentro del trámite cobro coactivo 18-103026 adelantado en contra de la actora, a partir de la petición de amparo de pobreza del 23 de enero de enero de 2019, excepto las ordenes relacionadas con medidas cautelares, en los términos señalados en la parte motiva de esta providencia y proceda dentro de ese mismo termino a resolver de fondo sobre la solicitud de amparo de pobreza presentada por la actora.

TERCERO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio a través de su delegatura de asuntos jurisdiccionales - grupo de trabajo para la verificación del cumplimiento, que en el termino de cinco (5) días siguiente a la notificación de ésta providencia proceda a designar un abogado de oficio a la actora dentro del trámite sancionatorio jurisdiccional, y una vez este acepte la designación deberá dar trámite inmediato a la solicitud de nulidad presentada por la ciudadana conforme las reglas del Código General del Proceso.

CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de esta acción.

QUINTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito del contenido de esta sentencia.

SEXTO: Si este fallo no fuere Impugnado, **REMÍTASE** el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual Revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

LUISA FERNANDA NIÑO DÍAZ
Juez

Proyectó: GMG

Firmado Por:

LUISA FERNANDA NIÑO DIAZ
JUEZ
JUEZ - JUZGADO 040 DE CIRCUITO LABORAL DE LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C.-SANTAFE DE BOGOTA D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **fa1ec2e271c7a6393a0fdbf23290907059ffe829a9318d252288d809062c8436**
Documento generado en 18/03/2021 11:43:24 PM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL: <https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>